

EGIPTO

Bienvenido Mr. Carter

LA conferencia de los países de la Liga Árabe ha terminado con una unanimidad mayor de lo que los primeros tres días hicieron suponer; el dramático gesto de Yaser Arafat al abandonar la sala de reuniones después de un agrio intercambio de puntos de vista con la representación de Arabia Saudita ha dado algún fruto: en el día de reflexión que precedió al final, Arabia Saudita cedió en algunos de sus puntos de vista y aceptó las sanciones contra Egipto, entre ellas la ruptura de relaciones diplomáticas. No ha conseguido la OLP, sin embargo, que las sanciones se extendieran a los Estados Unidos, que hubiera quedado privado así del petróleo árabe, ni que se intente una aproximación a la Unión Soviética. Ahora hay dos nuevas propuestas: una reunión económica árabe, propuesta por Iraq, que figura en la de los moderados, y otra del Frente de Firmeza, que prepara Siria y que debería celebrarse esta misma semana en Damasco, patrocinada por los "duros" (Siria, Argelia, Libia, Yemen del Sur y la OLP).

A pesar de la resolución final de compromiso en la conferencia de Bagdad, los Estados Unidos, Egipto e Israel no están preocupados por lo sucedido. Entienden que los moderados sólo se han dejado arrastrar ante presiones irresistibles en la conferencia, pero que su comportamiento posterior va a continuar siendo "moderado". La idea de que la sede de la Liga Árabe se traslade a Túnez, moderado entre los moderados —al menos mientras no se produzca el fin biológico de Burgiba; quizá después haya un movimiento todavía más afín a Occidente—, una vez que ha rechazado continuar en El Cairo, no les parece mala solución. En realidad, la Liga Árabe es poco operante.

Las sanciones económicas no preocupan excesivamente a los egipcios, que, por el contrario, creen ahora en un ma-

ná —nuevos protagonistas de "Bienvenido, mister Marshall"— procedente de los Estados Unidos, una técnica que les procure Israel y la posibilidad de convertirse en un país industrial en muy poco tiempo. Es muy posible que la necesidad de aumentar su armamento y su Ejército para evitar posibles hostilidades con países árabes —ya la frontera con Libia ha sido reforzada— se les lleve gran parte de la ayuda que esperan recibir ahora. La sustitución de los acuerdos y tratados comerciales con los países árabes por el intercambio que pueda

producirse entre Estados Unidos y los países occidentales les parece enormemente ventajoso. Aparte del dinero americano, los préstamos anunciados ya por Francia, Alemania Federal y el Japón les parece un gran negocio. La principal preocupación parece ser la de que las otras naciones árabes expulsen a los trabajadores egipcios: un millón y medio oficialmente, bastantes más de emigración clandestina. Aunque sueñan con que la nueva economía les permita darles trabajo inmediato, temen que lleguen airados, imbuidos de la idea de que Sadat ha traicionado y que Egipto es una nación que ha perdido la cara. Perderían las divisas que estos trabaja-

dores envían y se encontrarían con un fuerte contingente de revolucionarios y amargados. Todo se reduciría a más gastos de policía.

En este ambiente de optimismo ha llegado Sadat a Bonn: dice que trae una ayuda "comparable al Plan Marshall". Todo es, ahora, optimismo. Se puede romper en cualquier momento.

Todo lo que ha sucedido y está sucediendo, sin embargo, no recubre el verdadero fondo del problema de Oriente Medio, que es el de los pueblos, que están atravesando momentos de verdadera ira y de deseo de reivindicaciones de viejas humillaciones. Pueden sobrepasar a sus gobernantes. ■

LA DEMOCRACIA SE ESTRECHA

Giscard y las manifestaciones

LA manifestación es un derecho público que forma parte de la democracia; las nuevas limitaciones que le han sido impuestas en Francia pueden considerarse como un retroceso más en una forma de régimen político que es la consagrada en Occidente y que cada día va perdiendo algo de su esencia. Cuidado con lo que pasa en Francia, cuidado con lo que pasa en Alemania Federal; cualquier día sucederá en España. Y se dirá que tiene ya precedentes en países democráticos.

El pretexto surgió en las manifestaciones del centro de París el 23 de marzo. Se había celebrado una manifestación de obreros siderúrgicos, sin ningún desorden. Al terminar, los últimos grupos se produjeron de una manera violenta: atacaron a las fuerzas de Policía y destrozaron escaparates de cafés y de comercios. Hubo una batalla campal. Los protagonistas principales fueron los autónomos, unos "elementos incontrolados" que desde hace ya algún tiempo aparecen en los actos de la izquierda. Miembros del servicio de orden de la CGT —sindicato de inspiración comunista— se lanzaron contra uno de los "autónomos" que más se distinguía contra los ataques a la Policía: le registraron y encontraron su documentación: era un policía llamado Gerard le Xuan, que llevaba la pistola de reglamento. El ministro del Interior negó la actuación del policía, pero reconoció que hay miembros de la Policía entre los manifestantes, vestidos como ellos, para poderlos identificar y vigilar. Y que, sin ninguna duda, los responsables de los desórdenes han sido los sindicalistas, por el hecho mismo de organizar la manifestación. Que él —o su prefecto— habían autorizado legalmente.

Pocos días después, el tema ha tenido su continuación: el presidente de la República, en

Consejo de Ministros del 29 de marzo, se alzó contra las manifestaciones, y el del Interior daba órdenes a los prefectos de "rechazar ahora en adelante la autorización de manifestaciones en el centro de las ciudades". Rechazar la autorización es un eufemismo de prohibir; y prohibir las manifestaciones se entiende como la negación de un derecho democrático que en Francia se considera como una tradición, y que está admitido y regulado por las leyes: la primera, la de 30 de junio de 1881. Hace casi cien años. En estos cien años ha habido manifestaciones con violencias: lo que ha tratado la Policía y la ley es de culpar a los autores de las violencias, pero nunca de prohibir las manifestaciones. La idea de que los "autónomos" son elementos provocadores, y que la Policía estaba mezclada en ello para originar posteriormente esta prohibición, atormenta a los democráticos.

Los sindicatos acusan el "nuevo golpe contra la democracia" (CGT); el Gobierno "hace estallar en pedazos su fachada democrática y deja sitio a la represión" (CFDT). Los periódicos de la izquierda se indignan, los de la derecha aprueban: "El Gobierno ha sabido aprender la lección de la violencia" ("Le Figaro") y ha tomado "la decisión que se imponía" ("L'Aurore").

Sin embargo, Giscard y su Gobierno saben bien cómo actúan. Las limitaciones de ciertos derechos de huelga, las de las manifestaciones, tranquilizan a una gran parte de la opinión burguesa, que sigue siendo una mayoría electoral, y que toman las huelgas —las de los otros— y las manifestaciones como una agresión personal. Todo esto es, evidentemente, un dato más de la reaparición de la lucha de clases en Europa. ■